



**JUZGADO DÉCIMO (10º) ADMINISTRATIVO ORAL DEL
CIRCUITO JUDICIAL DE BOGOTÁ D.C.
SECCIÓN SEGUNDA**

Bogotá D.C., doce (12) de mayo de dos mil veintidós (2022)

Ref. Proceso	25000231500020030159000
Medio de Control	ACCIÓN DE GRUPO
Accionante	MAURO ROSALES Y OTROS
Accionados	BOGOTÁ, DISTRITO CAPITAL – SECRETARÍA DISTRITAL DE HÁBITAT – SECRETARÍA DISTRITAL DE PLANEACIÓN Y CONSTRUCTORA PROPIA K S.A. EN LIQUIDACIÓN

Procede el Despacho, a pronunciarse respecto a los memoriales presentados por el apoderado de la parte actora el 8 de agosto de 2019, 16 de enero de 2020 y 7 de julio de 2020¹.

I. ANTECEDENTES.

A través de memoriales presentados el 8 de agosto de 2019, 16 de enero de 2020 y 7 de julio de 2020², el apoderado de la parte actora informó al Despacho que se han presentado inconvenientes para el pago de la indemnización ordenada en las sentencias de primera y segunda instancia, el cual se encuentra a cargo del Fondo para la Defensa de los Derechos e Intereses Colectivos de la Defensoría del Pueblo, debido a:

i) El cambio de propietarios de los predios a las que se refieren las sentencias, pues ante el Fondo, se han presentado los antiguos y los nuevos propietarios a reclamar la indemnización, pese a que el Tribunal Administrativo de Cundinamarca determinó que los titulares de la indemnización son los propietarios de las viviendas al momento en que la sentencia de segunda instancia quedó en firme.

ii) Que las entidades y la constructora condenadas no han cancelado al Fondo para la Defensa de los Derechos e Intereses Colectivos de la Defensoría del Pueblo, el valor total de la condena impuesta.

iii) Que el Fondo para la Defensa de los Derechos e Intereses Colectivos de la Defensoría del Pueblo, no ha efectuado el pago de la totalidad de las indemnizaciones, pese a que tiene dinero en su poder hace más de tres años,

¹ Expediente folios 1350 a 1356 cuaderno 9.

² *Ibíd.*

desconociendo que el Tribunal Administrativo de Cundinamarca ya resolvió sobre la dualidad de peticiones respecto a una misma vivienda.

En atención a lo anterior, el Despacho mediante auto de 5 de noviembre de 2020³, ordenó requerir al Fondo para la Defensa de los Derechos e Intereses Colectivos, para que certificara a cuáles integrantes del grupo ya se les efectuó el pago, a cuáles integrantes del grupo no se les ha pagado la indemnización, y el valor de los pagos realizados por las demandadas por este concepto; al Distrito Capital de Bogotá D.C. y a la Constructora Propia K. S.A., para que informaran el valor de las sumas de dinero que han cancelado a la Defensoría del Pueblo para el pago de las indemnizaciones.

Mediante Oficio radicado el 15 de diciembre de 2020⁴, la apoderada de la Secretaría Jurídica Distrital, informó que “ (...) se canceló la totalidad del pago correspondiente a la indemnización que fue ordenada en las sentencias proferidas el 3 de julio de 2008 y el 17 de junio de 2010, tal como puede evidenciarse en los soportes adjuntos (...) Adicionalmente, según informe rendido en el proceso por la Defensoría del Pueblo con fecha 20 de mayo de 2019, conforme a los recursos recibidos para el pago de la sentencia y del grupo adicional, se observa que dicha entidad aún contaría con recursos para realizar el pago de las reclamaciones, razón por la cual, las afirmaciones del accionante carecen de sustento fáctico, en tanto que se habría pagado al fondo un total de \$1.461.230.901, suma que cubriría el total de la condena de la sentencia y el grupo adicional reconocido con auto de 26 de octubre de 2017”.

Los requerimientos al Fondo para la Defensa de los Derechos e Intereses Colectivos, al Distrito Capital de Bogotá D.C y a la Constructora Propia K. S.A., fueron reiterados en el numeral quinto del auto de 15 de febrero de 2022⁵, providencia en la que el Despacho indicó que conforme al Oficio No. 24988-10 de 20 de mayo de 2019⁶, el Director Nacional de Recursos y Acciones Judiciales de la Defensoría del Pueblo, precisó que los pagos que han sido consignados por las partes demandadas, son los siguientes:

ENTIDAD DEMANDADA	PRIMERA CONSIGNACIÓN	SEGUNDA CONSIGNACIÓN	TOTAL
SECRETARÍA DEL HABITAT	\$279.327.303	\$188.843.358	\$468.170.661
SECRETARÍA DE CONTROL DE VIVIENDA ALCALDÍA	\$279.327.303	\$188.843.358	\$468.170.661
DEPARTAMENTO DE PLANEACIÓN DISTRICTAL	\$217.375.000	\$134.614.579	\$351.989.579
CONSTRUCTORA PROPIA K S.A.	\$172.900.000	0	\$172.900.000
	\$948.929.606	\$512.301.295	\$1.461.230.901

³ Ibid. Folio 1357 cuaderno 9.
⁴ Ibid. Folio 1366 y 1367 cuaderno 9.
⁵ Ibid. Folios 1393 y 1394 cuaderno 9.
⁶ Ibid. Folios 1342 a 1347 cuaderno 9

En respuesta a lo solicitado por el Despacho, la Directora Nacional de Recursos y Acciones Judiciales, a través de memorial del 21 de febrero de 2022⁷, informó que *“(...) las condenadas no han consignado suma alguna diferente a la que usted bien relaciona en el numeral 3ro. del auto del 15 de febrero de 2022”*.

En oficio remitido al buzón electrónico del Juzgado el 1° de marzo de 2022⁸, la apoderada de la Secretaría Jurídica Distrital de Bogotá, reiteró lo indicado el 15 de diciembre de 2020, respecto a los pagos efectuados en cumplimiento de la condena al Fondo para la Defensa de los Derechos e Intereses Colectivos de la Defensoría del Pueblo y solicitó requerir a dicho Fondo para que precise las razones por las cuales no se han hecho los pagos de las indemnizaciones, aun cuando informó que las demandadas le han transferido la suma de \$1.461.230.901, para el pago.

Por su parte, la Constructora Propia K. S.A. no emitió ninguna respuesta a los requerimientos realizados.

II. CONSIDERACIONES.

En primera medida, es oportuno recordar que en la Sentencia proferida por el Juzgado el 3 de julio de 2008⁹, se precisó lo siguiente:

“(...) Así las cosas, las viviendas objeto de la presente acción popular son 56; de ellas, para 49 viviendas (87.5%), los peritos VALENTIN CASTELLANOS RUBIO y ALVARO PEDRAZA ORTEGA avaluaron daños a razón de \$15.000.000 para cada una, para realizar las reparaciones necesarias a fin de tornarlas habitables, para un subtotal de \$735.000.000; y 7 viviendas (12.5%) requieren reparaciones necesarias a fin de tornarlas habitables por valor de \$18.500.000 cada una para un subtotal de \$129.500.000; y para un total de \$864.500.000, lo que nos da un promedio de \$15.437.500 para cada vivienda.

En consecuencia, habida cuenta de que según lo dictaminaron los peritos, fueron 84 lotes los construidos, de los cuales solo 56 accionantes se han hecho parte hasta el momento, debe concluirse que es posible que los 28 restantes propietarios puedan hacerse parte en el término indicado en el artículo 55 de la Ley 472 de 1998.

Por ende, para efectos de calcular el monto total de la indemnización colectiva de que trata el artículo 65 numeral 1) de la Ley 472 de 1998, se multiplicará el número de accionantes que aún no se han hecho por el promedio del valor de los daños para cada vivienda, es decir, por \$15.437.500, lo que nos da un subtotal de \$432.250.000, suma que debe agregarse al gran total de \$864.500.000 que suman los daños particularizados por los peritos para los 56 accionantes, para un gran total de \$1.296.750.000.” (Subraya el Despacho).

Además, se precisó que quienes pretendieran hacerse parte dentro del término indicado en el artículo 55 de la Ley 472 de 1998, deberían hacerlo a través de apoderado, acreditando la titularidad del derecho mediante certificado de libertad y

⁷ Ibíd. Folio 1421 cuaderno 9

⁸ ⁸ Ibíd. Folio 1436 – 1427 a 1429 cuaderno 10

⁹ Ibíd. Folios 1543 a 1630 cuaderno 5.

tradición de la vivienda, demostrando encontrarse en las mismas condiciones de los accionantes en la demanda.

En ese orden, se evidencia que la sentencia de primera instancia estableció por concepto de indemnización, la suma de \$1.296.750.000, en la que incluyó las indemnizaciones para los 56 accionantes y el cálculo de indemnización para los 28 propietarios de los inmuebles que podrían integrarse a la acción de grupo y ser beneficiarios de la indemnización, luego de la publicación de las sentencias de primera y segunda instancia. Decisión que fue confirmada en su totalidad por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca – Sección Primera Subsección A, en Sentencia del 17 de junio de 2010¹⁰.

Ahora bien, en el **Auto de 19 de marzo de 2013**¹¹, el Despacho se pronunció frente a la solicitud de integración al grupo presentada por el apoderado de la parte actora el 28 de septiembre de 2012¹², esto es, en el término de 20 días posteriores a la publicación de la sentencia. En la mencionada providencia, se aceptó la integración del grupo con las personas que acreditaron la titularidad de los inmuebles al momento de presentarse la demanda.

Contra la anterior decisión, el apoderado demandante interpuso recurso de apelación, el cual fue resuelto por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, mediante **Auto de 28 de mayo de 2014**¹³, que revocó los numerales 3° y 4° de la providencia recurrida, y ordenó incluir en el grupo a 15 personas más estableciendo que respecto a las ellas, también se realizaría un dictamen pericial para determinar si los inmuebles cumplían con las condiciones para acceder a la indemnización.

Por **Auto de 16 de enero de 2015**¹⁴, el Despacho dispuso obedecer y cumplir la orden del superior y se decretó la práctica del dictamen pericial.

Mediante memorial radicado el 3 de febrero de 2015¹⁵, el apoderado de la parte actora Diego Sadid Losada Rubiano, nuevamente solicitó pronunciamiento sobre el grupo relacionado en el numeral 2° del memorial de adhesión al grupo del 28 de septiembre de 2012.

En virtud de lo anterior, el Despacho por **Auto de 13 de abril de 2015**¹⁶, se pronunció respecto a las personas interesadas en acogerse a la sentencia en calidad de nuevos propietarios, respecto a bienes de personas que fueron reconocidas en la sentencia, pero que ya no ostentaban la titularidad del inmueble, indicando que dicha solicitud resultaba improcedente.

¹⁰ Ibíd. Folios 327 a 402 cuaderno 6.

¹¹ Ibíd. Folios 940 a 950 cuaderno 8

¹² Ibíd. Folios 548 a 556 cuaderno 7

¹³ Tribunal Administrativo de Cundinamarca – Sección Primera – Subsección C en Descongestión, Magistrada ponente Ana María Rodríguez Álava, folios 11 a 22, cuaderno de apelaciones No. 1.

¹⁴ Expediente Folios 1056 a 1059 cuaderno 8

¹⁵ Ibíd. Folio 1063 a 1065 cuaderno 8

¹⁶ Ibíd. Folios 1098 a 1103 cuaderno 8

Contra la anterior decisión, el apoderado de la parte actora interpuso recurso de apelación¹⁷, que fue resuelto por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca mediante **Auto de 23 de noviembre de 2016**¹⁸, en los siguientes términos:

“(...) Así las cosas, es claro que el reconocimiento económico que se hizo en las sentencias proferidas en el expediente de la referencia, se hizo a título de indemnización a cada uno de los demandantes, y como es de público conocimiento, la indemnización se hace a título personal, por esa justa razón, fue que en las dos sentencias, se ordenó el reconocimiento y pago a cada persona actora, individualizada perfectamente con sus nombres y cédula de ciudadanía.

Por lo anterior, el problema jurídico puesto en conocimiento a esta Corporación, queda resuelto, en el entendido que las personas que deben recibir la indemnización reconocida, son las que ostentaban la propiedad del bien inmueble al momento de proferirse la sentencia de segunda instancia. La modificación de la tradición por cualquier causa en forma posterior a la sentencia, resulta un hecho ajeno a la acción de grupo, razón por la cual las relaciones patrimoniales que surgen entre ellas deberán ser resueltas a través de los mecanismos previstos por el legislador, pero no a través del presente medio de control.” (Subraya el Despacho)

Ahora bien, luego de practicado el dictamen pericial ordenado por el Tribunal en auto de 28 de mayo de 2014, para establecer si los inmuebles cumplían con los parámetros establecidos para acceder a la indemnización, en **Auto de 26 de octubre de 2017**¹⁹, el Juzgado se pronunció frente a los predios restantes, cuyos propietarios no se hicieron parte en el proceso, y solicitaron acogerse a la sentencia con posterioridad a la publicación de la misma.

En ese orden de ideas, para el Despacho es claro que, frente a lo peticionado por el apoderado de la parte actora en la solicitud de integración del grupo, se efectuaron los correspondientes pronunciamientos en primera y segunda instancia, como él mismo lo reconoce en los memoriales presentados el 8 de agosto de 2019, 16 de enero de 2020 y 7 de julio de 2020²⁰, donde indica que, de acuerdo con lo dispuesto por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, los titulares de la indemnización son las personas que acreditaron la propiedad del bien inmueble al momento de proferirse la sentencia de segunda instancia, por lo que es claro que tanto el Juzgado, como el Tribunal fijaron de manera clara y precisa los parámetros que debe verificar el Fondo para la Defensa de los Derechos e Intereses Colectivos de la Defensoría del Pueblo, para realizar el pago de las indemnizaciones individuales.

Por otra parte, y en lo que refiere al punto que menciona el apoderado actor en sus peticiones, en el que indica que las autoridades administrativas y la constructora condenadas, no han cancelado al Fondo para la Defensa de los Derechos e

¹⁷ Ibíd. Folios 1113 a 1115 cuaderno 8 del expediente

¹⁸ Tribunal Administrativo de Cundinamarca – Sección Primera – Subsección A, Magistrado ponente Felipe Alirio Solarte Maya, folios 42 a 53 cuaderno apelaciones No. 3.

¹⁹ Expediente Folios 1238 a 1247 cuaderno 9

²⁰ Ibíd.

Intereses Colectivos, el valor total de la condena impuesta, se evidencia que conforme a lo manifestado por el Director Nacional de Recursos y Acciones Judiciales de la Defensoría del Pueblo en el Oficio No. 24988-10 de 20 de mayo de 2019²¹, la Secretaría Distrital de Hábitat, la Secretaría de Control de Vivienda Alcaldía, el Departamento de Planeación Distrital y la Constructora Propia K S.A., han desembolsado al mencionado Fondo la suma de \$1.461.230.901, para el pago de las indemnizaciones, suma incluso superior a la establecida en la sentencia (\$1.296.750.000).

Aunado a lo anterior, la apoderada de la Secretaría Jurídica Distrital de Bogotá, informó mediante oficios del 15 de diciembre de 2020²² y 1° de marzo de 2022²³, que el Distrito ha cancelado la totalidad del pago correspondiente a la indemnización que fue ordenada en las sentencias proferidas el 3 de julio de 2008 y el 17 de junio de 2010, información que no fue desvirtuada por el Fondo para la Defensa de los Derechos e Intereses Colectivos en el Oficio 24988-10 de 20 de mayo de 2019, mencionado en precedencia, ni en el Oficio radicado en el Despacho el 21 de febrero de 2022²⁴, por lo que se infiere que dicho Fondo cuenta con recursos suficientes para terminar de efectuar los pagos pendientes a los titulares de las indemnizaciones.

Ahora bien, frente a la manifestación del apoderado actor en la que refiere que el Fondo no ha efectuado el pago de la totalidad de las indemnizaciones, pese a que tiene dinero en su poder, de acuerdo con lo informado por el Director Nacional de Recursos y Acciones Judiciales de la Defensoría del Pueblo, en el Oficio 24988-10 de 20 de mayo de 2019²⁵, el Despacho encuentra que para esa fecha, efectivamente el Fondo manifestó haber realizado pagos parciales a un número de personas beneficiarias del primer grupo e informó no haber efectuado ningún pago a otro número de personas beneficiarias de ese mismo grupo y del grupo de adherentes.

Sumado a lo anterior, se observa que pese a los requerimientos del Despacho, el Fondo para la Defensa de los Derechos e Intereses Colectivos de la Defensoría del Pueblo, no ha expuesto razones claras y concretas por las cuales no ha efectuado los pagos restantes, y tampoco ha acreditado que esta omisión haya ocurrido por falta de recursos o porque las reclamaciones presentadas no reúnan los requisitos para pagar la indemnización.

En ese orden de ideas, el Despacho **EXHORTARÁ** al Fondo para la Defensa de los Derechos e Intereses Colectivos de la Defensoría del Pueblo, para que sin dilaciones injustificadas y si aún no lo hubiere hecho, proceda a realizar los pagos de las indemnizaciones que se encuentran pendientes, conforme a los parámetros establecidos por este Juzgado y el Tribunal Administrativo de Cundinamarca en las Sentencias proferidas el 3 de julio de 2008 y el 17 de junio de 2010, así como en los

²¹ Ibid. Folios 1342 a 1347 cuaderno 9

²² Ibid. Folio 1366 y 1367 cuaderno 9

²³ Ibid. Folio 1436 – 1427 a 1429 cuaderno 10

²⁴ Ibid. Folio 1421 cuaderno 9

²⁵ Ibid. Folios 1342 a 1347 cuaderno 9

autos del 23 de noviembre de 2016²⁶, y 26 de octubre de 2017²⁷, y para que en lo sucesivo, resuelva todas las solicitudes que respecto al pago de las indemnizaciones le presenten los apoderados de las partes en el presente asunto conforme a sus competencias.

Sobre este punto, es oportuno precisar que aunque en la sentencia de primera instancia el Juzgado estableció en el numeral cuarto de la parte resolutive, que los restantes 28 presuntos perjudicados con los hechos objeto de la acción podían integrarse al grupo en los términos del artículo 55 de la Ley 472 de 1998, y que dicha solicitud debían realizarla ante el Despacho, no es menos cierto que el numeral 3° del artículo 65 de la Ley 472 de 1998, **establece que dicha función debe ser ejercida por el Defensor del Pueblo como administrador del Fondo para la Defensa de los Derechos e Intereses Colectivos**. La norma en comento prevé lo siguiente:

“(...) 3. El monto de dicha indemnización se entregará al Fondo para la Defensa de los Derechos e Intereses Colectivos, dentro de los diez (10) días siguientes a la ejecutoria, el cual será administrado por el Defensor del Pueblo y a cargo del cual se pagarán:

a) Las indemnizaciones individuales de quienes formaron parte del proceso como integrantes del grupo, según la porcentualización que se hubiere precisado en el curso del proceso. El Juez podrá dividir el grupo en subgrupos, para efectos de establecer y distribuir la indemnización, cuando lo considere conveniente por razones de equidad y según las circunstancias propias de cada caso;

b) Las indemnizaciones correspondientes a las solicitudes que llegaren a presentar oportunamente los interesados que no hubieren intervenido en el proceso y que reúnan los requisitos exigidos por el Juez en la sentencia.

Todas las solicitudes presentadas oportunamente se tramitarán y decidirán conjuntamente mediante Acto Administrativo en el cual se reconocerá el pago de la indemnización previa comprobación de los requisitos exigidos en la sentencia para demostrar que forma parte del grupo en cuyo favor se decretó la condena. (...)”

De acuerdo con la norma citada, además de administrar los recursos que las demandadas le entreguen para cumplir la reparación de los perjuicios del grupo, dentro de esa función administradora, al Fondo también le corresponde decidir sobre las peticiones de quienes pueden hacer parte del grupo atendiendo las especificaciones señaladas en la sentencia, toda vez que no se trata de decisiones jurisdiccionales las que debe adoptar, **sino actuaciones administrativas encaminadas a cumplir el fallo, las cuales debe resolver mediante acto administrativo como claramente lo señala el inciso 2 del literal b) del numeral 3° del artículo 65 de la Ley 472 de 1998**, de manera que las solicitudes de adhesión al grupo, debieron presentarse y resolverse mediante acto administrativo por el

²⁶ Tribunal Administrativo de Cundinamarca – Sección Primera – Subsección A, Magistrado ponente Felipe Alirio Solarte Maya, folios 42 a 53 cuaderno apelaciones No. 3.

²⁷ Expediente Folios 1238 a 1247 cuaderno 9

Fondo para la Defensa de los Derechos e Intereses Colectivos de la Defensoría del Pueblo.

No obstante, como en el presente caso fue este Juzgado el que resolvió la solicitud de adhesión al grupo presentada luego de la publicación de la sentencia, esto no es óbice para que el Fondo continúe con sus funciones de administración y comprobación de los requisitos exigidos en la sentencia para el pago las indemnizaciones.

Respecto a las funciones del Fondo para la Defensa de los Derechos e Intereses Colectivos de la Defensoría del Pueblo, el H. Consejo de Estado²⁸, en Sentencia del 14 de junio de 2018, estableció lo siguiente:

“(…) i) El juez de conocimiento debe establecer en la sentencia los requisitos que deben cumplir las personas que consideran se les debe extender los efectos del fallo.

ii) Se ordenará la publicación de extractos de la sentencia para que dentro de los veinte (20) días siguientes, los afectados interesados en integrar grupo manifiesten su intención.

iii) El Fondo para la Defensa de los Derechos e Intereses Colectivos, solo se encarga del recibo, administración y pago de los beneficiarios, de las indemnizaciones decretadas por el juez en la sentencia de acción de grupo.

iv) La Defensoría del Pueblo es la encargada de administrar el mencionado fondo.

Ahora bien, teniendo en cuenta estas precisiones y del estudio sistemático del artículo 65, la Sala considera que la Defensoría del Pueblo es la encargada de resolver la solicitud de la adhesión elevada por la demandante, con posterioridad a la providencia que pone fin al proceso. De hecho, el numeral 2 del mencionado artículo impone a las autoridades judiciales que conocen de acciones de grupo, la obligación de señalar en la sentencia los requisitos que deben cumplir las personas que no hicieron parte del proceso y que deseen beneficiarse de los efectos de la decisión.

Además de lo anterior, el numeral 4 dispone la publicación de extractos del fallo en un medio de amplia difusión, con el fin de que los interesados en beneficiarse con los perjuicios reconocidos en la decisión se adhieran, siempre y cuando i) cumplan con los requisitos establecidos en la sentencia y ii) se presenten las solicitudes de adhesión ante el juzgado dentro de los veinte (20) días siguientes a la publicación.

La Sala no desconoce que al realizar una lectura aislada del numeral 4, pareciera que la norma impone al juzgado de conocimiento la obligación de conocer y resolver sobre las solicitudes de adhesión. Sin embargo, dicha norma

²⁸ Consejo de Estado- Sección Cuarta - Sentencia del catorce (14) de junio de dos mil dieciocho (2018), 25000-23-42-000-2017-05133-01(AC) C.P. Dra. Stella Jeannette Carvajal Basto. Actora: María Evangelina Rocha Espitia En Representación De Mariam Cristina Sierra Rocha accionados: Juzgado Octavo Administrativo de Bogotá y Defensoría del Pueblo.

no se puede leer de esa manera, sino en forma sistemática, junto con los demás numerales que componen el artículo 65 de la Ley 472 de 1998.

Ahora bien, el numeral 3 del artículo 65 de la Ley 472 de 1998 indica que a la Defensoría del Pueblo le corresponde dar trámite y decidir en conjunto sobre las solicitudes presentadas mediante acto administrativo, lo que le da razón de ser al numeral 2, pues ya en la sentencia el juez natural, además de establecer los requisitos que deben cumplir las personas para que se adhieran a los efectos de la decisión, estudió lo pertinente en la acción de grupo, que es i) la existencia de un daño, ii) declaración de los perjuicios que se causaron a razón de daño que se le produjo a un grupo de personas y iii) la responsabilidad del Estado.

Por lo tanto, la Defensoría del Pueblo verificará si las personas cumplen o no los requisitos establecidos en la sentencia para integrar el grupo de adherentes, es decir, no se realizará ningún juicio propio de las autoridades jurisdiccionales, esto es, no estudiará si existió un daño, un perjuicio, un eximente de responsabilidad, reconocimiento de derechos subjetivos, entre otras cosas.”

Teniendo en cuenta lo anterior, el Despacho dispondrá que el apoderado de la parte actora y los apoderados de las accionadas, en lo sucesivo deberán dirigir las peticiones relacionadas con el pago de las indemnizaciones restantes ante el Fondo para la Defensa de los Derechos e Intereses Colectivos de la Defensoría del Pueblo, pues como se indicó en precedencia, tanto el Juzgado como el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, fijaron de manera clara los parámetros para el pago de las mismas a los accionantes y a las personas que se adhirieron al grupo luego de proferidas las sentencias de primera y segunda instancia, puntos que quedan resueltos con esta providencia y respecto a los cuales el Despacho no emitirá nuevos pronunciamientos.

En mérito de lo expuesto, el Juzgado Décimo Administrativo del Circuito de Bogotá – Sección Segunda,

RESUELVE

PRIMERO: EXHORTAR al **FONDO PARA LA DEFENSA DE LOS DERECHOS E INTERESES COLECTIVOS DE LA DEFENSORÍA DEL PUEBLO**, para que sin dilaciones injustificadas y si aún no lo hubiere hecho, proceda a realizar los pagos de las indemnizaciones que se encuentran pendientes, y para que en lo sucesivo, resuelva todas las solicitudes que respecto al pago de las indemnizaciones le presenten los apoderados de las partes en el presente asunto, conforme las razones expuestas en esta providencia.

SEGUNDO: ORDENAR a los sujetos procesales para que en lo sucesivo dirijan las peticiones relacionadas con el pago de las indemnizaciones restantes ante el Fondo para la Defensa de los Derechos e Intereses Colectivos de la Defensoría del Pueblo, por las razones expuestas en esta providencia.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

AUGUSTO LLANOS RUIZ
JUEZ

Firmado Por:

Augusto Llanos Ruiz
Juez Circuito
Juzgado Administrativo
010

Bogotá, D.C. - Bogotá D.C.,

Este documento fue generado con firma electrónica y cuenta con plena validez jurídica, conforme a lo dispuesto en la Ley 527/99 y el decreto reglamentario 2364/12

Código de verificación: **13da23ecae11f041e3b7bae0cf7386dc12d291a3e6bd34f56de562a40278da75**

Documento generado en 12/05/2022 12:42:18 PM

Descargue el archivo y valide éste documento electrónico en la siguiente URL: <https://procesojudicial.ramajudicial.gov.co/FirmaElectronica>